

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

CONSULTA (Art. 69 CPTSS)	
DEMANDANTE	NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA
DEMANDADOS	PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-021-2021-00054-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Garantía de Pensión Mínima RAIS - Retroactivo
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia, en **grado jurisdiccional de Consulta** en favor de la demandante, dentro del presente proceso, promovido por la señora **NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA** contra **PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 028**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer en grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, la sentencia desestimatoria de las pretensiones que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 30 de marzo de 2022.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el día 19 de julio de 2012 la señora NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA cumplió 57 años de edad, momento para el cual tenía acreditadas 1.150 semanas, las que se exigen para poder acceder al reconocimiento de la garantía de pensión mínima. Adujo que, en consecuencia, solicitó el 28 de septiembre de 2015 a PROTECCIÓN S.A. el reconocimiento de esa prestación.

Indicó que, en vista de que transcurría el tiempo y la entidad no le resolvía sobre el reconocimiento de la prestación económica, el día 22 de julio de 2016 reiteró la solicitud ante PROTECCIÓN S.A, insistiendo en la necesidad de la expedición del bono pensional con destino a PROTECCIÓN S.A. Afirma haber recibido respuesta el 5 de septiembre de 2016, informándole que su bono pensional se encontraba en trámite.

Adujo que el 12 de enero de 2017 solicitó nuevamente a PROTECCIÓN S.A., se diera celeridad a la solicitud de reconocimiento pensional, ya que llevaba más de 15 meses esperando que se resolviera de fondo su petición. El 25 de octubre de 2017 recibió respuesta de parte de la entidad, de manera escueta, solo indicándole que se estaba adelantando reconstrucción de su historia laboral.

Que el 20 de abril de 2018 reafirmó su solicitud y, finalmente la entidad le reconoció la prestación a través de comunicado del 2 de mayo de 2018, otorgándole el derecho desde el 1º de marzo de 2018, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente. Añadió que el 10 de mayo de 2018 presentó solicitud de reconsideración, reclamándole a la entidad que le reconociera la prestación desde el 28 de septiembre de 2015, fecha en la que elevó la solicitud

de reconocimiento, fecha para la cual ya cumplía con los requisitos legales para acceder a la garantía de pensión mínima.

Se duele que PROTECCIÓN S.A., con su actuar negligente y el retardo en el reconocimiento pensional, la ha privado del retroactivo pensional comprendido entre septiembre de 2015 y febrero de 2018.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se condene a PROTECCIÓN S.A., a pagarle el retroactivo pensional causado entre el 28 de septiembre de 2015 y 28 de febrero de 2018 con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas objeto de condena y las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

PROTECCIÓN S.A., según se observa en el PDF 6 del expediente digital. A través de dicha respuesta, negó los hechos de la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la misma y, formuló las excepciones perentorias de *“Falta de causa legítima para pedir, Inexistencia de la obligación, Cobro de lo no debido, Buena fe de la parte demandada, Compensación, Prescripción, Pago y la Innominada o Genérica”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 30 de marzo de 2022, el Juez de conocimiento absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones impetradas en su contra, y le impuso a la demandante la obligación de pagar las costas procesales a la entidad demandada.

Los argumentos en que se apoyó para arribar a dicha decisión, consistieron en que consideró que, si bien existe falta de diligencia por parte de PROTECCIÓN S.A. en los trámites para el reconocimiento de la pensión de la demandante, la misma no podía reconocerse sin que se retirara del sistema pensional, hecho particularmente determinante cuando se trata de la garantía

de pensión mínima, al ser una manifestación del principio de solidaridad pensional por parte del Estado.

Verificó que la actora cumplió los 57 años de edad el día 19 de julio de 2012 y solicitó la prestación desde el 28 de septiembre de 2015, siéndole reconocida la misma a partir del 1 de marzo de 2018.

Explicó que la competencia para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el Ministerio de Hacienda y no el fondo como lo dice la activa. Sin embargo, no dejó de reconocer que conforme al Decreto 832 de 1996 artículo 4, es la Oficina de Bonos Pensionales de la referida cartera, la que, con base en la información que suministre el fondo privado o la aseguradora, debe reconocer o no la prestación. También aplicó el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, inciso 2º, en cuanto la respectiva administradora o compañía de seguros, cualquiera sea la modalidad de la pensión, será la encargada de hacer los trámites para ese reconocimiento.

Encontró en la prueba acreditada al interior del proceso (con la respuesta emitida por PROTECCIÓN S.A.), que la señora NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA, si bien reclamó el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, cotizó al sistema pensional hasta el día antes a aquel en que operó el reconocimiento, deduciendo de esa situación que, la garantía de pensión mínima, según lo establecido por el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, al inspirarse en el principio de solidaridad, traducido en la posibilidad de que el Estado complete la parte que haga parte para financiar la pensión, ello significa que si ese afiliado continuó devengando salario por estar trabajando, no es posible reconocerle la garantía de pensión mínima, porque no se cumplirían los supuestos de solidaridad que hacen imperioso el reconocimiento.

Con todo, hizo mención a que, conforme a la ley, en el evento de que existiere un retardo y negligencia de parte del fondo privado, sin que la persona estuviere laborando y teniendo garantizado su mínimo vital, allí sí eventualmente podría el fondo responder por esos retardos, conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que establece que el respectivo fondo debe reconocer la pensión, sin importar que se le haya o no pagado el respectivo bono pensional.

Argumentó que el estado, con los recursos de todos, le garantiza acceso al mínimo vital a los beneficiarios de la garantía de pensión mínima, pero siempre que no estén recibiendo salario. Que, al estar recibiendo ese mínimo, no tiene en entredicho su mínimo vital, y por ello no se hace necesario el principio de solidaridad.

También tuvo en cuenta como razón adicional para la absolución, el hecho de que PROTECCIÓN S.A. debe tener a disposición hasta la última semana efectivamente cotizada por la asegurada, para proceder a hacer su reconocimiento integral, aspecto que solo pudo materializarse al validar todas las semanas cotizadas por la actora, hasta el día anterior al reconocimiento, en los términos en que PROTECCIÓN S.A. lo hizo.

VI. -GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por las partes, en virtud del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dicha decisión fue remitida a este tribunal en grado jurisdiccional de consulta, en favor de la señora NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA.

Alegatos de Conclusión:

La parte demandante presentó alegatos de conclusión en la oportunidad procesal pertinente. A través de los mismos, reseñó que en este proceso no hay duda, entre otros, sobre los siguientes aspectos: - Que la demandante cotizó 1,478 semanas, y; - Que el 2 de mayo de 2018 la entidad reconoció la garantía de pensión mínima a la demandante.

Argumentó que *“no desconocemos que en el RAIS la prestación económica no está condicionada al cumplimiento de requisito de edad y semanas cotizadas, en principio, también dependen de la voluntad libre del afiliado y del monto de las cotizaciones realizadas junto con los rendimientos financieros del portafolio conformado con tales aportes y bonos pensionales a lo que hubiere lugar, capital acumulado que debe permitir la financiación de una pensión de vejez equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, tal y como lo expresa el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con*

lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1889 de 1994...”. A partir de tales argumentos, entiende que “en lo que atiene a la garantía contenida en el artículo 65 del estatuto de la seguridad social, concurre en su causación no sólo el cumplimiento de la edad y las semanas mínimas exigidas en dicha normativa, sino también la voluntad del afiliado manifestada en la solicitud o reclamación de dicha garantía pensional, pues otra cosa es su financiación...”.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La garantía de pensión Mínima en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - Retroactivo.-

Grado Jurisdiccional de Consulta, La competencia de este colegiado en esta oportunidad se extiende a todos los aspectos de la Litis, pudiendo revisarse todos los puntos de la decisión del A quo a través de la cual absolvió a PROTECCIÓN S.A. de todas las pretensiones de la demanda, tal y como lo dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS.

La Garantía de Pensión Mínima.

La Ley 100 de 1993 contempló la garantía especial de pensión mínima en el régimen de ahorro individual con solidaridad. La misma se estableció en el artículo 65 de la ley de seguridad social, permitiendo que hombre y mujeres que hubieren llegado a la edad pensional, respectivamente 62 y 57 años, que hubieren cotizado un mínimo de semanas de 1,150, que no cuenten con el

capital suficiente para financiar una pensión de vejez, tienen derecho a que, con cargo a la Nación, se les complete los recursos a efectos de acceder a una pensión de vejez de salario mínimo, **como una clara y palpable expresión del postulado de solidaridad.**

Está claro, según lo ha recordado la jurisprudencia de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SL2512 de 2012, entre otras), que este derecho constituye un beneficio que satisface una necesidad puntual de grupos poblacionales en riesgo de vulnerabilidad, que por sus condiciones socioeconómicas de subsistencia encuentran justificación en la percepción de este derecho.

Tal garantía cumple la finalidad de proteger a aquellas personas que, pese a haber realizado un esfuerzo significativo en cuanto a densidad de cotizaciones se refiere, no logran el capital suficiente para acceder a la pensión.

La respectiva administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a que se encuentre afiliada la persona, conforme al artículo 9 del Decreto 832 de 1996 tiene a cargo varias obligaciones en este tema, entre ellas, la determinación del saldo del capital acumulado, lo cual inexorablemente comprende el valor del bono pensional, quedando en posición de gestión de los trámites respectivos y, una vez comprobado el cumplimiento de los supuestos legales, elevar la solicitud de reconocimiento ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad determine si otorga o no el derecho a la garantía de pensión mínima.

CASO CONCRETO

En el presente caso, no existe duda que la señora NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA nació el 19 de julio de 1955, por lo que cumplió los 57 años de edad el día 19 de julio de 2012; que el 28 de septiembre de 2015 reclamó a PROTECCIÓN S.A. el reconocimiento de la garantía de pensión mínima; que estuvo vinculada laboralmente hasta marzo de 2018 con SOCIEDAD MINERA DEL RIO SAS y realizó cotizaciones pensionales a través de PROTECCIÓN S.A. y que, dicha administradora le reconoció la garantía de pensión mínima, mediante Comunicado del 2 de mayo de 2018, a través del cual le informó a la

asegurada que, *“de acuerdo al análisis efectuado para determinar el derecho a la prestación económica se informa que la fecha de reconocimiento de su prestación es 01-mar-2018...”*. Dicha prestación se reconoció por valor del salario mínimo legal mensual vigente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de absolver a PROTECCIÓN S.A. de las pretensiones de la demanda, esta sala encuentra que tales razonamientos se ajustan a derecho.

En primer lugar, resulta más relevante y determinante el hecho de que la señora NUBIA CECILIA GÓMEZ MEJÍA haya continuado laborando y percibiendo salario hasta el mes de marzo de 2018, que fue el mes a partir del cual empezó a disfrutar de la pensión de vejez, que el simple retardo que PROTECCIÓN S.A. haya podido tener en el adelantamiento de los trámites legales para la concreción de la redención y pago del respectivo bono pensional.

En efecto, siendo consecuentes con la manifestación del principio de solidaridad que se concreta a través de la garantía de pensión mínima, es innegable que, al encontrarnos frente a una persona que venía percibiendo el salario mínimo hasta el día antes a aquel en que empezó a disfrutar de la pensión, resulta claro que no hay lugar a retroactivo pensional desde el año 2015 cuando solicitó el reconocimiento de la prestación, más allá que desde dichas calendas ya contare con más de 1150 semanas cotizadas y tuviere la edad mínima pensional desde el año 2012, teniendo en cuenta que entre septiembre de 2015 y febrero de 2018 la demandante no cumplía con las exigencias legales para que pudiese acceder a dicha garantía.

Incluso, si bien el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, que establecía que *“cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima”*, es una disposición que en la actualidad se encuentra derogada por la Ley 1955 de 2019, fue una norma que tuvo égida y vigencia durante las calendas en que la actora accedió al derecho pensional, y que

regularon el tema de la prestación, por lo menos en lo que al retroactivo pensional reclamado se refiere.

Por lo demás, las consideraciones del juez de primera instancia, referidas a que PROTECCIÓN S.A. requería a efectos de comunicar a la demandante el reconocimiento del derecho, tener en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por la asegurada para concluir si se cumplía o no el capital suficiente para financiar la pensión en condiciones ordinarias, es acertada. De otro lado, también es válida la consideración del A quo, en cuanto a que la regla establecida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en torno a que las administradoras deben reconocer la prestación sin importar que se les haya o no pagado el respectivo bono pensional, resulta únicamente aplicable a la pensión de vejez ordinaria, más no a la de garantía de pensión mínima, la cual indudablemente constituye una manifestación del principio de solidaridad de parte del Estado en materia pensional.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia.

En esta oportunidad no hay lugar a imponer costas procesales de segunda instancia, teniendo en cuenta que este asunto se ha conocido en grado jurisdiccional de Consulta.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Consulta, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de fijar costas procesales de segunda instancia.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada